

Santiago, diez de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos RIT T-384-2020, RUC 2040292992-9, del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, caratulados “Zavala Farfán Jennifer con Consulado de la República de Argentina”, por sentencia de tres de enero de dos mil veintidós, se acogió la demanda de tutela laboral con ocasión del despido y se condenó al demandado al pago de las indemnizaciones y prestaciones que se indican.

El demandado dedujo recurso de nulidad, y una sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, por resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil veintidós, lo rechazó.

Respecto de dicha decisión la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia para que esta Corte lo acoja y dicte sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho respecto de la cual se solicita unificar la jurisprudencia, consiste en declarar la procedencia de aplicar al caso la institución de la inmunidad de jurisdicción, consagrada en los artículos 43, 45 y 53 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, y en los artículos 22, 24, 27 a 36, 38, 39, 41 y 47 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, instrumentos suscritos y ratificados por el Estado de Chile.

Reprocha que la decisión se apartara de la doctrina sostenida en las decisiones que apareja para efectos de su cotejo, que corresponden a las dictadas por esta Corte en los autos rol N°891-2010 y 3493-2010, en las que se sostuvo que la inmunidad de jurisdicción en el ámbito del derecho internacional se refiere a



la posibilidad de intervención del Poder Judicial de un Estado en las actuaciones de otro con consecuencias en su territorio, de manera que el primero debe abstenerse de juzgar los actos del segundo, prerrogativa que alcanza a las personas que representan a tales personas jurídicas, cuya inmunidad se extiende a lo efectuado por sus agentes, sea por la naturaleza de la actuación (inmunidad *ratione materiae*) o por las funciones que la persona cumple, como ocurre con los funcionarios diplomáticos (inmunidad *ratione personae*), excepto cuando el Estado acreditado renuncie soberanamente a la referida prerrogativa, que se encuentra reconocida en la Convención de Viena. Sea cual fuere la razón que en la actualidad se invoque para explicar la existencia y vigencia del principio analizado por medio de instrumentos de validez internacional como el citado, su respeto importa el reconocimiento y resguardo de las soberanías del Estado receptor y del acreditado, en pro de la reciprocidad, por cuanto sobre la base de dicha igualdad se protegen los derechos fundamentales. Lo que condujo a concluir que la naturaleza de la institución en examen y los principios en que se sustenta, hacen improcedente restringir sus efectos en determinados casos o materias, más allá de los términos que la propia Convención que la reconoce, ni aún a pretexto de tratarse del ámbito de aplicación de los derechos laborales y previsionales.

Tercero: Que la sentencia impugnada rechazó el recurso de nulidad que el demandado dedujo, sobre la base, en lo que interesa, de la causal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, acusando la infracción del artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, artículos 43, 45 y 53 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y artículos 22, 24, 27 a 36, 38, 39, 41 y 47 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Como fundamento de la decisión, respecto del primer motivo, se estimó que no se vislumbra la forma en que se habrían dejado de aplicar los artículos 45 y 53 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y 24, 27, 30 a 32, 34 a 36, 38, 39 y 47 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, toda vez que ninguno se relaciona con la materia discutida en el juicio, lo que obsta a concluir que se los haya infringido; en tanto que en lo que atañe a los artículos 43 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, una y otra importan el reconocimiento de un estatuto especial para los funcionarios diplomáticos o consulares, que, en ese entendido, no se trata de una inmunidad de jurisdicción propiamente dicha, sino de privilegios funcionales al desempeño o cometido de la misión diplomática o



consular, esto es, de inmunidades personales y no estatales. En efecto, la inmunidad de jurisdicción se traduce en la imposibilidad de ejercer ese poder o expresión de la soberanía respecto de otro Estado, porque existe una relación de paridad o de igualdad soberana, en los términos a que se refiere el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas; sin embargo, corresponde a una realidad indesmentible que la actividad de un Estado en territorio extranjero no sólo importa la realización de actos inherentes a su soberanía o de índole administrativa, sino también otros de carácter comercial, particular o empresarial que comprometen los intereses de personas comunes, lo que ha llevado a distinguir entre una inmunidad de jurisdicción absoluta (actos de *iure imperii*) y otra de carácter relativa (actos de *iure gestionis*), y la tendencia actual se orienta a sostener que la inmunidad estatal admite excepciones relacionadas con la naturaleza de la actuación del Estado extranjero, de manera que cuando se está en presencia de actos de soberanía surge la imposibilidad de juzgamiento, pero, cuando atañen a actividades de naturaleza empresarial no puede tener cabida la inmunidad de jurisdicción. En ese escenario, el asunto sometido a la decisión del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta concierne a una prestación de servicios personales ejecutada en territorio chileno, que no responde a la idea de un acto de gobierno, ejecutado por el Estado extranjero en su condición de soberano, por lo que, no cabe, en este caso, la inmunidad de jurisdicción. Además, una conclusión diferente implicaría desatender el deber del Estado de Chile de asegurar a todas las personas la igualdad ante la ley, de otorgar una tutela judicial efectiva y de proteger el trabajo conforme lo consagrado en el artículo 19 N° 2, 3 y 16 de la Constitución Política de la República, lo que también permite descartar la infracción al artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales.

Cuarto: Que, si bien se constata la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia respecto de la materia de derecho propuesta para su unificación, habida cuenta de lo resuelto en los ofrecidos por el recurrente para su cotejo y en el que se impugna, lo cierto es que esta Corte considera que no procede unificar jurisprudencia, por cuanto coincide en la decisión que estimó que la inmunidad de jurisdicción no alcanza al asunto discutido en autos.

Quinto: Que, en efecto, esta Corte ya se ha pronunciado sobre el punto, expresando en la sentencia dictada en causa rol N°8750-2018 similares argumentos a los desarrollados en la impugnada, en cuanto a que la idea de



inmunidad de jurisdicción dice relación con el reconocimiento formal que los Estados hacen de su propia soberanía, sintetizado en el tópico “*par in parem non habet imperium*”, en virtud del cual declaran el mutuo respeto al ejercicio de sus atribuciones, en cuanto emanación de su independencia y derecho a la autodeterminación, en virtud de lo cual históricamente se aceptó en el contexto del derecho internacional la deferencia recíproca entre los Estados de no someter al otro a su propia jurisdicción; agregando que tal noción, que en un principio entendía el derecho como una cuestión absoluta, en una comprensión contemporánea de las relaciones entre los Estados devino en un concepto acotado de la inmunidad de jurisdicción, en función de la naturaleza del acto desplegado por el Estado, distinguiendo entre los denominados actos de *iure imperii* y los de *iure gestionis*, donde los primeros se refieren a las actuaciones del Estado en cuanto tal, mientras que los segundos, los casos en que el Estado actúa como un particular. En aquéllos, el Estado goza de inmunidad de jurisdicción; en éstos, someten sus actos de gestión a la jurisdicción del Estado receptor.

En tal perspectiva, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas debe entenderse como un precepto que debe interpretarse de manera restrictiva, en cuanto favorece con inmunidad de jurisdicción sólo a los “agentes diplomáticos” a título personal, pero no al Estado al cual representan, al que sólo podrá extenderse la inmunidad absoluta en aplicación a los actos de soberanía, mas no a uno de gestión, como sucede en la especie; por lo que no es posible extender la prerrogativa de la inmunidad de jurisdicción que consagra la citada Convención a las obligaciones laborales emanadas del vínculo laboral que una Embajada mantuvo con una persona natural, por tratarse de un acto de gestión excluido del referido beneficio y que, por lo tanto, no lo exime de la obligación de comparecer ante la jurisdicción del país destinatario y ante los tribunales del foro.

Por último, se tuvo en consideración que la interpretación contraria lesiona el derecho de igualdad y el del debido proceso, que obliga al Estado de Chile a garantizar el acceso efectivo a la justicia de todos sus habitantes, y especialmente de sus trabajadores, máxime si la denegación de jurisdicción, en la práctica, implica que el trabajador afectado habría de dirigirse a los tribunales del Estado foráneo para conseguir su pretensión de cumplimiento de la sentencia judicial, con el consiguiente desgaste humano y financiero.



Sexto: Que, en consecuencia, habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, que coincide con lo resuelto en la sentencia impugnada, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandado en contra de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Regístrese y devuélvanse.

Rol N° 114.665-2022

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y los abogados integrantes señora Leonor Etcheberry C., y señor Pedro Águila Y. Santiago, diez de octubre de dos mil veintitrés.



En Santiago, a diez de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

